



«Mirage»: El escándalo va con ellos.

ochenta tanques «Centurión» y veinticinco «jets» «Hunter», de Gran Bretaña; quinientos tanques, trescientos cañones antiaéreos y ochenta aviones de combate, de la URSS. Arabia Saudita ha recibido, ya desde 1964, noventa tanques, dieciséis aviones de combate, siete aviones de transporte, dos baterías de cohetes antiaéreos, dos baterías de misiles «Thunderbird» y veinte helicópteros, de los Estados Unidos; doce cazas «Hunter» y cuarenta y seis «Lightning», de Gran Bretaña. Siria y Egipto han adquirido armas a la URSS por valor de «cientos de millones de dólares». En cuanto a Israel, al que los Estados Unidos acaban de vender cincuenta aviones «Phantom», está recibiendo armas regularmente de varios países occidentales; muy especialmente, de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania Federal. «Daily Mail», de Londres, acaba de revelar que Gran Bretaña ha vendido, en secreto, dos-

cientos tanques «Centurión» a Israel. Al margen de estas ventas oficiales existe el contrabando de armas, realizado por traficantes especializados, muchas veces conocidos de los gobiernos y con su anuencia. Esta grave política de armamento de una zona especialmente peligrosa se trata de justificar por la tesis del «equilibrio», que supone que hay más posibilidades de paz si los contendientes están en posesión de un mismo número de armas; tal tesis oculta generalmente un negocio de Estado. La fabricación de armamentos está concebida como una empresa y, a veces, los ministros de Defensa se convierten en verdaderos viajeros de comercio. Francia, con sus «Mirage», ha realizado en el mundo una verdadera propaganda comercial. Por otra parte, las armas son el más típico producto de consumo antes de llegar a ser usadas se «usan de moda», se inutilizan por el desarrollo técnico propio y del enemigo designado. Envejecen

Economía

LA CRISIS DE LA MINERÍA ASTURIANA

El problema laboral en las cuencas mineras asturianas vuelve a cobrar actualidad a raíz de las huelgas masivas de las últimas semanas: en realidad, las tensiones socioeconómicas de todo tipo que han afectado a la región asturiana desde 1961-1962 han constituido, apenas sin altibajos, una de las más constantes —y significativas— características de la evolución del capitalismo español en la última década. Asimismo, debe considerarse la actual situación planteada en HUNOSA dentro de un contexto —crisis de la minería del carbón, creación de la factoría de Veriña de UNINSA, desmantelamiento industrial de núcleos tradicionales, quiebras de muchas empresas comerciales y de servicios, etcétera, etcétera— enormemente ilustrativo de los problemas que plantea un determinado proceso de crecimiento económico general del país sobre toda una región, geográfica, social y económicamente muy delimitada, con una larga tradición industrial y con una dinámica social que, en muchos momentos, ha protagonizado la historia del movimiento obrero español (véase a este respecto la obra, de reciente publicación, «El movimiento obrero en Asturias», de David Ruiz).

El primer hecho al que hay que referirse para intentar explicar las tensiones que vienen produciéndose desde hace años en Asturias es a la crisis de la minería de la hulla, puesta de manifiesto, de forma inequívoca, cuando a raíz de los conflictos colectivos de 1961 y 1962, en demanda de mayores salarios, el sector de la minería, asentado sobre las viejas bases estructurales creadas en las dos primeras décadas del siglo, y basado fundamentalmente en el bajo coste del factor trabajo, comienza a resentirse agudamente, entrando en un proceso irreversible de crisis. Las elevaciones de salarios y la disminución de los trabajadores empleados en el sector coinciden con un estancamiento de la producción desde entonces. La iniciativa privada —ante el cambio de perspectiva de rentabilidad de las explotaciones— traspasa al INI, en pocos años, la mayor parte de los activos: será el sector público el que —socializando las pérdidas— se enfrente ahora (HUNOSA) con una crisis de producción —y con las tensiones sociales que la acompañan—, que no es sino el resultado de las condiciones históricas en que se ha venido desenvolviendo el proceso productivo, junto a la baja calidad de los productos obtenidos. Es una crisis de capital, de técnica, de productividad, de dimensión de las plantas industriales. Como hemos dicho en otras ocasiones, es la quiebra de todo un sistema que conoció sus mayores auge —y esto es ciertamente representativo— durante la I Guerra Mundial y en el período autárquico de los años 40 y 50. De esta forma, se asiste a la liquidación definitiva de una situación histórica sobre la que se ha asentado el capitalismo tradicional español y que ha constituido una fuente de acumulación permanente durante muchos años, correlativa con un sistema de protección arancelaria de tal intensidad que hacía innecesaria para sus beneficiarios cualquier modernización de las explotaciones. Hecho que coincide, en los últimos años, por otra parte, con la aparición y desarrollo de otros sectores e intereses dentro del capitalismo español, así como con una nueva orientación de la política comercial.

En segundo lugar, hay que apuntar, en el marco actual de las tensiones que se registran en los centros industriales asturianos, a otro problema, que tampoco puede considerarse ajeno al anterior: es el

planteado con la creación de la Factoría Siderúrgica de Veriña, en las proximidades de Gijón, en la que UNINSA quiere localizar la mayor parte de su producción, procediendo, por ello, a desmantelar progresivamente los complejos instalados desde hace muchos años en La Felguera, Mieres y Moreda. Esta concentración del capital y de la producción siderúrgica asturianos, al margen de cualquier planteamiento de conjunto y sin unas mínimas pautas de planificación regional, está provocando toda una serie de tensiones no sólo entre la mano de obra directamente afectada, sino también, como resulta lógico, entre aquellos sectores industriales, comerciales y de servicios sobre los que repercutirá, sin duda, el decaimiento de los centros tradicionales de población. En este contexto es en el que se inscriben las constantes y agudas tensiones conflictuales que se desarrollan tanto entre la pequeña burguesía como entre la clase trabajadora de Langreo, La Felguera y de otros núcleos de la cuenca del Nalón. La confluencia de distintos intereses, la estrechez de los cauces legales de representación, las débiles posibilidades de reivindicación organizada, etcétera, etcétera, han creado en torno al problema planteado una situación dramática (que acapara la atención de los órganos de prensa asturianos, «La Voz de Asturias», «La Nueva España», «El Comercio», «Asturias Semanal», etcétera, etcétera, y, en general, de toda la prensa del país) que pone de manifiesto (junto a otros extremos: ausencia de una adecuada estrategia reivindicativa de determinados grupos, sectores e intereses, etcétera) la incapacidad de la planificación indicativa —y del régimen de Acción Concertada— para llevar a cabo un programa racional de reconversión y desarrollo regional que debía haberse previsto con mucha anterioridad —dadas las experiencias similares de otros países europeos y la crisis que se anunciaba a partir de 1962—. En definitiva, la ausencia de una política económica capaz de hacer posible una reconversión necesaria —de la actividad industrial y de la mano de obra— en función de los intereses prioritarios de la comunidad y con un escalonamiento en el tiempo adecuado a la creación de servicios, redes comerciales, transportes, etcétera, etcétera, necesarios para la satisfacción de las nuevas necesidades sociales que genera un proceso de esta naturaleza.

En estas circunstancias, la necesidad de una respuesta global al actual proceso de concentración del capital vinculado a las industrias básicas asturianas se hace más apremiante; y se trata, ante todo, no de entonar de nuevo las lamentaciones de «La Aldea Perdida», sino de definir una alternativa a un proceso de reconversión que únicamente está siendo orientado por los intereses del capital, generando, dada su naturaleza, toda una serie de tensiones, desequilibrios y costes sociales —traspasados al sector público a través de HUNOSA— y que recaen sobre grandes sectores de la población asturiana. No hay que olvidar que, en menos de diez años, la minería en esta región va prácticamente a desaparecer, al mismo tiempo que la geografía urbana e industrial habrá de registrar fuertes alteraciones. ¿Se ha pensado realmente cuál va a ser el destino de los sectores de población afectados por este proceso, del cual los actuales conflictos laborales constituyen sólo una secuencia más —ni la primera ni la última— que volverá a repetirse con desiguales grados de intensidad en los próximos años? ■ ARTURO LOPEZ MUÑOZ.